



Valledupar, veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Referencia: INSOLVENCA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE.

CONVOCANTE: YONIS JESUS FLOREZ MENDOZA

RADICADO: 20-001-40-03-003-2021-00020-00.

I.ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a decidir respecto de la objeción presentada por parte del acreedor BBVA COLOMBIA S.A. a través de apoderado, dentro del asunto de la referencia.

II.SUSTENTO DE LA OBJECCIÓN

El acreedor BBVA COLOMBIA S.A., por medio de su apoderado y dentro del trámite de insolvencia en referencia, objetó la relación de crédito presentada por la deudora, al tener duda de la existencia, naturaleza y cuantía del crédito en favor de Inversiones González Andrade SAS, José Mendoza, José Aramendiz y Federman Ramírez, puesto que, los acreedores José Aramendiz y Federman Ramírez aportaron letras de cambio con una misma fecha de elaboración, en tanto que, de Inversiones González Andrade SAS y José Mendoza no se han hecho presente dentro del proceso para controvertir y demostrar la existencia de la obligación. Señala también el objetante que, en virtud de los principios de buena fe y transparencia, todos los participantes deben tener claridad sobre los créditos que se pretenden calificar y graduar en el procedimiento de negociación de deudas.

Por lo anterior, solicita que se declare probada la objeción presentada y se excluyan los créditos de los señores José Aramendiz, Federman Ramírez, José Mendoza e Inversiones González Andrade SAS.

Es necesario precisar que tanto el deudor como los acreedores cuestionados omitieron recorrer el traslado y se abstuvieron de realizar alguna precisión frente a la objeción platenada.

III.CONSIDERACIONES

Objeción presentada por BBVA COLOMBIA S.A.

Para zanjar esta objeción, debe referirse en primer término que respecto del trámite que debe dársele a las objeciones, quedó establecido en el artículo 552 del C.G.P. que, si no se conciliaren las objeciones en la audiencia, el conciliador la suspenderá por diez (10) días, para que dentro de los cinco (5) primeros días inmediatamente siguientes a la suspensión, **los objetantes presenten ante él y por escrito la objeción, junto con las pruebas que pretendan hacer valer**. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre la objeción formulada y aporten las pruebas a que hubiere lugar. **Los escritos presentados serán remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, quien resolverá de plano**



sobre las objeciones planteadas, mediante auto que no admite recursos, y ordenará la devolución de las diligencias al conciliador.

Como primera medida es necesario acotar que, con fundamento a lo estipulado en el art. 552 del C.G.P., no es procedente decretar las pruebas que hubieran solicitados los acreedores al interior de sus objeciones, puesto que la norma en cita, establece claramente que son éstos quienes deben aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Basados en dicha norma el despacho se abstendrá de decretar las pruebas solicitadas por el objetante y en su defecto entrara a resolver la presente objeción con las piezas procesales que integran la actuación surtida por el operador de insolvencia.

En el caso que ocupa la atención del Despacho, se encuentra que el apoderado del Banco BBVA Colombia, presentó controversias por la existencia y cuantía de los créditos en favor de los señores José Aramendiz, Federman Ramírez, José Mendoza e Inversiones González Andrade SAS, razón por la cual y amparado en el artículo 167 del C.G.P. que establece en su inciso final que *“Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”*, recae sobre los citados acreedores, en su condición de interesados la carga de demostrar lo contrario aunque sea sumariamente, es decir, que los créditos de marras sí existían y que su naturaleza y cuantía corresponde a la informada en la relación de créditos presentada para adelantar el trámite de insolvencia.

Bajo ese contexto, la oportunidad para que los acreedores desplegaran esa actividad probatoria es al recorrer el traslado de las objeciones en virtud de lo previsto en el artículo 552 del C.G.P., siempre y cuando no las hayan aportado con la inclusión a la negociación de deudas, de manera que, al proceder a examinar las pruebas aportadas en el expediente, encontramos que las obligaciones que se refieren a los acreedores José Aramendiz por la suma de \$70.000.000, y Federman Ramírez por la suma de \$200.000.000 se encuentran demostradas sumariamente la existencias de sus créditos con el aporte de copias de las letras de cambio.

El Juzgado debe precisar que, en línea de principio, el deudor no debe arrimar al trámite de insolvencia soporte probatorio de las afirmaciones contenidas en su solicitud de negociación de deudas, pero, cuando uno de sus acreedores formula una objeción respecto a la existencia de una de las deudas inventariadas, las reglas probatorias imponen, ahí sí al deudor, y al titular de la acreencia censurada, la carga de demostrar los contornos de la obligación tildada de presunta, para de esa manera despejar las dudas que se ciernen sobre el trámite, máxime cuando este comportamiento resulta connatural a los principios de lealtad y buena fe procesal que insuflan nuestro ordenamiento.

Los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante se edifican sobre la base de la buena fe del solicitante, pero esa buena fe no debe entenderse como la imposición del dicho de los deudores como verdad absoluta frente a los demás interesados, sino como un deber de conducta, orientado por la lealtad y la transparencia, que impone brindar la totalidad de la información que se requiera para clarificar el camino legal de rehabilitación del insolvente.



Para soportar este aserto, el Despacho hace suyas las conclusiones expuestas por la Corte Constitucional en sentencia T-999 de 2012, las que se compendian a continuación:

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. Del texto de la norma se desprende que la Carta no solo consagra la buena fe como una presunción que favorece a las personas en sus reclamaciones, sino que también se constituye en un deber que debe ser respetado por estas cuando acuden a las autoridades para hacer valer sus derechos, como una garantía de la prevalencia del bien común.”

“Desde luego, lo dicho implica que el mencionado principio también tiene sus límites y condicionamientos, derivados de otro postulado fundamental como es el de la prevalencia del interés común. En modo alguno puede pensarse que el principio de la buena fe se levante como barrera infranqueable que impida a las autoridades el cumplimiento de su función, pues, mientras la ley las faculta para hacerlo, pueden y deben exigir los requisitos en ella indicados para determinados fines, sin que tal actitud se oponga a la preceptiva constitucional. En nuestro Estado de Derecho, las leyes gozan de aptitud constitucional para imponer a la administración o a los jueces la obligación de verificar lo manifestado por los particulares y para establecer procedimientos con arreglo a los cuales pueda desvirtuarse en casos concretos la presunción de la buena fe (...).”

“En virtud de ello, la Corte ha señalado que la buena fe ha pasado de ser un principio general del derecho para convertirse en un postulado constitucional. Este trascendental principio exige de los particulares y de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta (vir bonus). La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. En similar sentido, en la Sentencia T-1117 de 2003 se dijo que “según lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, si bien el Estado no puede defraudar a los administrados en la confianza que ellos depositan en él y en el valor mismo de sus actuaciones, el particular igualmente debe actuar de manera tal que su buena fe y transparencia se vean reflejadas en las actuaciones que cumpla frente a las diferentes entidades del Estado.”

“Este principio tiene una estrecha relación con el deber de colaborar con la administración de justicia consagrado en el artículo 95 Constitucional. Dice la norma: “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (...) 7) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia...”



“Dicho mandato no solo se refiere al deber que tienen los particulares de colaborar con los entes jurisdiccionales en causas ajenas a la propia, sino que también hace alusión a la actitud que adopta el interesado cuando acude a los jueces para hacer valer los derechos que considera le están siendo vulnerados.”

Bajos los anteriores parámetros y en lo atinente a la objeción presentada por el BANCO BBVA COLOMBIA S.A. sobre la existencia y cuantía de los créditos en favor de JOSÉ ARAMENDIZ y FEDERMAN RAMÍREZ, sobre los citados acreedores, se logró demostrar con los documentos aportados en la negociación de deudas, las letras de cambio que sustentan las obligaciones y que sirven de soporte para contrarrestar la objeción planteada en la audiencia de negociación de deudas. Puestas de este modo las cosas, como se acreditó sumariamente la existencia de los créditos que el deudor dijo tener en favor de los señores JOSÉ ARAMENDIZ y FEDERMAN RAMÍREZ, es imperativo no aceptar la objeción formulada contra ellos por parte de Banco BBVA COLOMBIA S.A., por lo tanto, esta objeción no prosperará.

Ahora bien, caso contrario sucede frente a las objeciones planteadas por las obligaciones en favor de los acreedores José Mendoza e Inversiones González Andrade SAS, de quienes se tiene que en el transcurso de la negociación y del traslado de la objeción, nunca aportaron documento alguno para su demostración, como le exigen las normas trascritas anteriormente, como hubiere sido, el título valor que respalde el crédito el cual brilla por su ausencia.

Teniendo como base los fundamentos expuestos a lo largo de la presente providencia, es claro que resulta procedente la objeción propuesta por Banco BBVA Colombia S.A., por falta de prueba de la acreencia a favor de José Mendoza e Inversiones González Andrade SAS, luego de que no se pudiera comprobar infolios la existencia de los títulos valores que amparan dichas obligaciones. Se encuentra argumentos suficientes para declarar probada la objeción de inexistencia de las acreencias en favor de José Mendoza e Inversiones González Andrade SAS y se ordenará la exclusión de las mismas de la relación de acreencias presentada por el deudor en su solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la objeción presentada por el Banco BBVA COLOMBIA S.A. dentro del proceso de Insolvencia Económica de Persona Natural no Comerciante, solicitada por YONIS JESUS FLOREZ MENDOZA, respecto de los créditos con JOSÉ MENDOZA E INVERSIONES GONZÁLEZ ANDRADE S.A.S., los cuales deben ser excluidos del trámite de INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, por las razones expuesta en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA LA OBJECCIÓN presentada por la acreedora BBVA COLOMBIA S.A., contra los créditos de los señores JOSÉ ARAMENDIZ y



RAMA JUDICIAL
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR-CESAR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

FEDERMAN RAMÍREZ en calidad de acreedores del señor YONIS JESUS FLOREZ MENDOZA, por inexistencia de la obligación.

TERCERO: DEVUÉLVASE el presente proceso al centro de conciliación FUNDACION LIBORIO MEJIA para que continúe con lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

Firmado Por:

**CLAURIS AMALIA MORON BERMUDEZ
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL VALLEDUPAR**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

89365f28d9703955b03376a79863668fcdc6e65a827da38d4915576fd5b5c6a8

Documento generado en 26/04/2021 11:11:35 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**